



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 3

SENTENCIA INTERLOCUTORIA

EXPTE. NRO: 27449/2015

AUTOS: “UNALAPA SRL c/ MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL s/IMPUGNACION DE DEUDA”

Buenos Aires,

AUTOS Y VISTOS:

Que llegan las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud del recurso de apelación obrante a fs. 76/83 contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de Fiscalización del MTEySS, obrante a fs. 71/73 que dejó firme la resolución por la cual se le impuso una multa al quejoso, en virtud de las infracciones cometidas al artículo agregado sin número a continuación del artículo 40 de la ley 11.683.

Que notificada de ello, se hizo saber a la rubrada, que la resolución en cuestión agotaba la instancia administrativa y que aquella podía ser recurrida por la vía prevista en el art. 10 inc. b) de la Resolución METySS N° 655/05 y sus modif..

Que a fs. 132, el organismo ministerial ordenó la remisión de los presentes obrados informando el incumplimiento del requisito de previo pago de la multa impuesta, en los términos del art. 15 de la ley 18.820 y art. 10, inc b) de la Resolución MTSS 655/2005, a los fines de la apertura de la instancia judicial.

Que no obstante la omisión apuntada, la aquí accionante, en su escrito recursivo, deduce la inconstitucionalidad y/o inaplicabilidad de la exigencia del “solve et repete”, a la luz –fundamentalmente- de los preceptos que emergen de los tratados incorporados al plexo constitucional a partir de la reforma de 1994.

Que sin perjuicio de ello, manifiesta que el presente caso se encuadra en los supuestos que pretorianamente se han establecido a los efectos de excepcionarlo del pago previo. Pero contradictoriamente en el párrafo siguiente indica que en caso de rechazarse el planteo aludido, se lo intime al pago de la multa impuesta.

Que, en orden a la cuestión debatida en estas actuaciones, en primer término cabe señalar que el artículo 36 de la ley 25.877 faculta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a verificar y fiscalizar en todo el territorio nacional, el cumplimiento por parte de los empleadores de la obligación de declarar e ingresar los aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, que integran el Sistema Único de la Seguridad Social, sin perjuicio de las facultades concurrentes con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Que contra las resoluciones dictadas en el marco de la norma, el sancionado se encuentra habilitado a recurrir ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, en la forma, modo y plazos fijados en el artículo 9° de la Ley N° 23.473 y sus modificatorias, estableciendo como condición previa para acceder al recurso de apelación el pago de la multa impuesta, conforme lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 18.820 y sus modificaciones.

Que así las cosas en relación al planteo introducido, el Alto Tribunal ha sostenido en reiteradas oportunidades que si bien el art. 15 de la ley 18.820 impone un requisito indispensable para la viabilidad del recurso de apelación, ello no importa una restricción inconstitucional a las garantías de igualdad y de defensa en juicio (Fallos 155:96; 162:363; 235:479; 238:418; 247:181; 261:101; y sus citas: 288:287; 296:57 entre otros), pues existen situaciones que quedan comprendidas dentro de las hipótesis de excepción que la doctrina de aquella así ha considerado: desproporcionada magnitud del monto del depósito con relación a la concreta capacidad económica del apelante, que torna ilusorio su derecho en razón del importante desapoderamiento que podría significar su cumplimiento (CSJN., Fallos 247:181; 250:208 y fallo allí citado; ídem Mussio Hnos S.A. s/Impugnación actas de inspección”, sent. del 25.3.86, y específicamente, dictamen del señor Procurador General de la Nación Argentina del 26/7/85, consid. IV), el supuesto de monto excepcional y falta comprobada e inculpable de los medios para enfrentar su erogación (Fallos 256:38; 261:101), y cuando a través del requerimiento de esta clase de recaudos se revele en modo inmediato e inequívoco un propósito persecutorio o desviación de poder de parte de los órganos administrativos de aplicación (Fallos 288:287 consid. 10).

Que en el mismo orden, si bien el Alto Tribunal admitió la plena operatividad de las previsiones del art. 8 inc. 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos,

Fecha de firma: 13/03/2025

Firmado por: SEBASTIAN EDUARDO RUSSO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: FERNANDO STRASSER, JUEZ DE CAMARA - SUBROGANTE

Firmado por: JAVIER BENITO PICONE, SECRETARIO DE CAMARA



#26909890#447192029#20250312092217578

norma sustancialmente análoga al art. 18 de la C.N. señaló que, pese a ello, aquellas no desplazan ni derogan las directivas del art. 15 de la ley 18.820 - del entonces vigente - art. 12 de la ley 21.864 en cuanto establecía la obligación de depositar los aportes omitidos, su – actualización monetaria, recargos e intereses para acceder a la instancia judicial, salvo que el interesado afirme y pruebe que el exigido como depósito previo resulta exorbitante desproporcionado con su concreta capacidad económica. Similar temperamento fue adoptado por el Máximo Tribunal, en materia tributaria pues ha admitido la validez constitucional de la exigencia de pago previo de los tributos recargos pertinentes, como requisito de la intervención judicial, con la salvedad de supuestos de monto excepcional de falta comprobada e inculpable de los medios necesarios para enfrentar la erogación, doctrina que ha sido extendida para interpretar el art. 15, segunda parte, de la ley 18.820 (ver Fallos 215:225 501 ; 219:668; 247:181; 250:208; 256:101; 285:302; 287:101; 295:62 240; 296:40 57; 307:1753).

Que en consecuencia consideramos que en autos no se han objetivado los supuestos que autorizarían eximir al recurrente del depósito previo exigido por los art. 15 de la ley 18.820 y 39 bis del decreto ley 1285/58 sustituido por el art. 26 de la ley 24.463, como requisito para la admisibilidad del recurso deducido, corresponde declarar la inadmisibilidad formal el remedio procesal intentado en virtud de no haberse cumplido lo dispuesto por la normativa legal citada.

Por otra parte, los estados contables acompañados en autos emitidos por Contador Público sobre la supuesta iliquidez de la empresa para efectuar el pago del depósito previo no resulta válida a los fines requeridos pues la misma ha sido confeccionada sobre la base de documentación exclusivamente aportada por el interesado y circunscripta a un acotado período de tiempo.

Por ello lo expuesto el Tribunal **RESUELVE:** 1) Declarar formalmente inadmisibile el recurso interpuesto; y 2) Sin costas en la Alzada.

Por disposición del Tribunal, cúmplase con la comunicación dispuesta por la CSJN en la Acordada 15/13 (p. 4 y conc.).

Protocolícese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA VOCALIA 1 SE ENCUENTRA VACANTE (ART. 109 RJN).

